



Puntos de interés especiales:

- Crisis y economía mundial
- Crisis en la Unión Europea
- Presupuesto nacional
- Economía mexicana

Contenido:

Presentación	1
La crisis y la economía mundial	3
Deuda, recortes y democracia en la Unión Europea	8
El presupuesto nacional para 2012	14
El estado actual de la economía mexicana y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	18
La política energética nacional. Sarahí Ángeles Cornejo† (in memoriam)	24

Números 13-14

México, D.F., Septiembre-Octubre de 2011

PRESENTACIÓN

Las turbulencias de la economía mundial, su desaceleración económica, las altas tasas de desempleo y el incremento del descontento social, parecen no ser motivos suficientes para que los jefes de Estado y de gobierno del G-20, logren construir una agenda de acuerdos para enfrentar la profunda crisis del modelo de desarrollo que liberalizó al capital financiero, que le dio carta blanca para que por medio del crédito, la especulación y las nuevas prácticas financieras, se contrarrestaran las dificultades del sector productivo y del propio proceso de acumulación para incrementar el valor del capital. Modelo que también se ha caracterizado por aumentar la mencionada valorización del capital profundizando las condiciones de explotación en las que se desenvuelve el mundo del trabajo, es decir, de la flexibilización laboral.

No se consideran medidas para controlar y regular al gran capital que ha sido el responsable de esta crisis y menos aún el de transformar de forma integral este modelo que de “desarrollo” ya le queda muy poco. Por el contrario, se promueven políticas que se encaminan hacia “más de lo mismo”, así lo revela el acuerdo para una recapitalización adicional a 29 instituciones bancarias. Medidas que ponen en evidencia que la mayor intervención del Estado, por sí misma, no se traduce en acciones que reviertan las causas de la crisis ya que, por el contrario, se han dirigido hacia un apoyo sin cuestionamientos al gran capital, en desmedro de las condiciones de trabajo y de vida de los sectores mayoritarios de la población mundial.

Este tema, el de “La crisis y la economía mundial”, es abordado en la nota de Genoveva Roldán (GACEM). En ella se insiste en que la actual crisis no sólo es de índole financiera y que se encuentre al margen de las condiciones en las que se desenvuelve la estructura productiva, ya que son innegables las interrelaciones entre ambas y de éstas con las características

que ha asumido la circulación y el consumo de las mercancías. Es una ruptura de índole global, en virtud de los encadenamientos e interrelaciones que ha tejido la actual estructura económica mundial. Ahondando en los recientes acontecimientos europeos, Xabier Arrizabalo Montoro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España, presenta una colaboración, para este número doble del *Boletín Momento Económico*, que tituló “Deuda, recortes y democracia en la Unión Europea”, sostiene que la experiencia de la “crisis de la deuda externa” que estalló en 1982, principalmente en América Latina, es muy elocuente porque comparte elementos con la actual situación europea, en especial en cuanto a las causas profundas que la provocan así como a las duras medidas y sus drásticos resultados sociales, para cuya imposición se alega como excusa.

En cuanto a las condiciones en las que México, mediante su gasto público, enfrenta la actual crisis, Josefina Morales Ramírez (GACEM), presenta la nota “El presupuesto nacional para 2012”, considera que la propuesta de Ley de Ingresos de 2012, subestima el alcance de la crisis internacional en curso desde 2008, ya que reitera la limitada capacidad del Ejecutivo de realizar una política anticíclica para impulsar el crecimiento económico y el empleo; además, no incluye medidas para resolver el crecimiento del endeudamiento nacional.

En la nota sobre el “Estado actual de la economía mexicana y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, Alejandro López Bolaños (GACEM) propone una evaluación sobre los logros, a la fecha, de la presente administración y qué relación mantienen con las metas económicas trazadas en ese Plan. La revisión de los principales indicadores económicos nacionales le permiten afirmar que el recuento es poco alentador en cuanto a los objetivos de alcanzar una economía competitiva y generadora de empleos y con igualdad de oportunidades.

Este número del *Boletín*, incluye una editorial del GACEM sobre “La política energética nacional. Sarahí Ángeles Cornejo†” (*in memoriam*). En ella se recuperan, de forma escueta, algunas de las ideas centrales de su pensamiento, que se encuentran plasmadas en el libro de reciente aparición *Reforma energética: anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante*, publicado en dos volúmenes, coordinado y compilado por ella. Consideramos que Sarahí, nuestra querida amiga y compañera, permanecerá como un faro que no sólo guía, sino que da alicientes a todos aquellos que, como ella, sostenemos que es posible construir una industria energética nacional autónoma, fuerte y cuyo objetivo principal sea participar en la construcción de un verdadero desarrollo nacional en México.

LA CRISIS Y LA ECONOMÍA MUNDIAL

Genoveva Roldán Dávila

Integrante del GACEM

La profunda crisis que exhibe la economía mundial a partir del año 2007, ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre sus causas, niveles de expresión, trayectoria y posibles acciones para enfrentarla. Los supuestos, conceptos y postulados neoclásicos más ortodoxos, que han impulsado el modelo económico que se viene desarrollando desde hace más de tres décadas, difícilmente percibieron que habría crisis pues, en su concepción, la “nueva economía” con sus tendencias globalizadoras y su inagotable revolución tecnológica acercaban a la humanidad a una economía global, sin escollos para su crecimiento y a la convergencia económica que terminaría por eliminar las asimetrías internacionales y regionales en el desarrollo. Dicha ideología, asistida por el sentido común así como por su fortaleza ideológica y política se empeña en negar y ocultar que la estructura económica internacional y sus mecanismos de funcionamiento –económicos, políticos e institucionales–, se enfrentan a una profunda crisis integral y estructural, la cual podemos caracterizar como la del capitalismo en esta fase de la globalización.

No se trata sólo de una crisis financiera, que se encuentra al margen de las condiciones en las que se desenvuelve la estructura productiva, ya que son innegables las interrelaciones entre ambas y de éstas con las características que ha asumido la circulación y el consumo de las mercancías. Es una ruptura de índole global, en virtud de los encadenamientos e interrelaciones que han tejido la actual estructura económica mundial. Por si no fuera suficiente la teoría, la historia de la acumulación capitalista nos corrobora que ésta, es intrínsecamente contradictoria, las crisis no le son ajenas y que, en esta etapa, la globalización no ha generado los espacios suficientes para que el capital logre aumentar su valor, ante la sobreacumulación de capital y mercancías. La ramificación como hiedra del

La estructura económica internacional y sus mecanismos de funcionamiento se enfrentan a una profunda crisis integral y estructural: la del capitalismo en esta fase de la globalización

capital financiero, se constituye en la acción que se propone lograr la valorización mediante el crédito, la especulación y las nuevas prácticas financieras y que, a la vez, se convierte en una colosal fuente de inestabilidad y desestructuración.

En cuanto a las políticas económicas instrumentadas a raíz de las manifestaciones más agudas de la crisis, en 2008, consideraron que en el caso de los países europeos periféricos, estas economías enfrentaban una crisis de liquidez, de tal manera que se procedió a facilitarles préstamos para el rescate de la banca, austeridad fiscal y reformas estructurales que profundizan las aplicadas con el thatcherismo y posteriormente con los programas de convergencia que exigió la Unión Europea (UE). Con ello, se consideró, que se restituiría la certidumbre sobre su deuda y su acceso a los mercados. En el caso de Estados Unidos con el llamado "alivio cuantitativo" (QE1, QE2) para el capital privado financiero y productivo (Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, American International Group, Citigroup, Bank of America, General Motors, General Electric, Chrysler), la regulación "macroprudencial" de la Reserva Federal (FED), los estímulos fiscales y con la reducción de los tipos de interés a corto plazo, se esperaba restablecer la confianza y estabilidad en los mercados, la recuperación del crédito y el empleo y, por tanto, la reactivación económica.

Estas políticas permitieron que, en el corto plazo, además de contener la quiebra del sistema financiero, se logró menguar la dimensión de la recesión. Con ello, el crecimiento de la economía mundial en 2010 logró recuperarse y alcanzó 5%, además generó expectativas de que las diversas medidas adoptadas, habían logrado cerrar el paso a la profundización de la crisis. Los posibles tropiezos que se percibían no eran severos. Así lo expresaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero de 2010, cuando señalaba que "la recuperación mundial empezó con más vigor del que se había previsto ... [con la aclaración de que el avance sería]...a un ritmo diferente en cada región". Por ello se pronosticó que para 2011 el crecimiento que alcanzaría la economía mundial sería de 4.5%. La realidad ha sido rotunda y, una vez más, los organismos internacionales y diversas versiones de la teoría neoclásica pusieron de relieve sus limitaciones para explicar el origen y desenvolvimiento de la crisis.

Esta perspectiva, que se resiste a observar las contradicciones sistémicas, hacia el tercer trimestre de 2010, no sin ciertas dificultades, reconocía que diversos indicadores

mostraban lo anémico de la recuperación, no sólo por sus expresiones en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, sino también por sus manifestaciones en diversos países de América Latina, Asia y África. Con el inicio del segundo semestre de 2011, adquiere más clara expresión la desaceleración sistémica de la economía mundial, la volatilidad en los mercados y su reorientación hacia los activos refugio (las deudas de Estados Unidos y Alemania), las depreciaciones monetarias, las caídas de las bolsas de valores en los recién pasados meses de agosto, septiembre y octubre (el Dow Jones registró su "peor septiembre" en una década), así como de los precios de materias primas y el resurgimiento de las crisis bancarias y de deuda. La psicología se vuelve a apoderar de la economía y las "alteraciones económicas", se explican por el "egoísmo", "avaricia" y "ambición" de unos cuantos, así como por los "excesos" en los que vivieron los países que hoy observan altos niveles de endeudamiento.

El FMI quien, pese a su profunda crisis de credibilidad, ha retomado el liderazgo como agente central en la elaboración de acciones para enfrentar la crisis, en su documento de los primeros días de octubre (FMI, *Perspectivas Económicas. Las Américas. Vientos cambiantes, nuevos desafíos de política*, 2011), señala que el escenario básico que ellos describieron en el pasado mes de septiembre (*Perspectivas de la Economía Mundial*), suponía que las autoridades contenían la crisis en la periferia de la zona euro; que las políticas fiscales de Estados Unidos lograban encontrar el equilibrio entre el apoyo a la economía a corto plazo y la consolidación fiscal a mediano plazo; que no aumentaría la volatilidad en los mercados financieros mundiales y que las economías emergentes clave, que han registrado superávits, ajustarían sus políticas para contrarrestar la desaceleración de la demanda externa, a través del fomento a su mercado interno.

¿Porqué no se cumplió ese escenario?, ¿qué explica la agudización de la crisis, con su posible estancamiento o su doble caída? Porque el diagnóstico de la crisis y las acciones para enfrentarla no han sido certeras; porque se confunden las causas de la crisis, con sus expresiones. El énfasis lo centran en las continuas dificultades para diseñar y aplicar medidas eficaces para remediar los problemas en los balances de entidades soberanas y bancarias de Europa, que se agravan, y los cuales pueden agudizar la

El diagnóstico de la crisis y las acciones para enfrentarlas no han sido certeras, porque se confunden las causas de la crisis, con sus expresiones

pérdida generalizada de confianza y afectar a los mercados mundiales de crédito. Aunque también se reprocha, en cuanto a Estados Unidos, la pérdida de confianza que se generó a raíz del *impasse* en torno al aumento del límite de su deuda. Tal parece que la crisis se desenvuelve en la esfera de la subjetividad, ya que se insiste en la "pérdida de confianza", "intensificación de la aversión mundial al riesgo", "interacciones negativas entre diversos agentes", y no se establecen sus nexos con las características estructurales sistémicas que, en búsqueda de una mayor valorización del capital, han impulsado la desregulación y predominio financiero, a costa del debilitamiento de las estructuras productivas y desequilibrios comerciales, así como en alteraciones y sobreendeudamiento en el consumo, expoliación del trabajo con graves consecuencias humanas, sociales y económicas y el abandono por el capital y el Estado de la "cuestión social".

El debate, una vez más en la historia del capitalismo, está situado respecto al papel y presencia del Estado, su relación con el mercado y, en última instancia, con el proceso de acumulación. El FMI insiste en que los estados sí deben intervenir, pero nunca poniendo en riesgo el equilibrio de sus finanzas. Debido a "...la débil recuperación de la demanda privada y el futuro aumento de la carga fiscal la política monetaria de Estados Unidos y Europa deberá seguir proporcionando estímulos por un periodo prolongado". La intervención del Estado será justificada, porque debe "...reforzar las reservas de capital de los bancos para poner fin al círculo vicioso macrofinanciero entre los bancos y las entidades soberanas y para respaldar al mismo tiempo el funcionamiento ordenado de los mercados de la deuda de las entidades soberanas de la periferia".

Para el FMI la "conjugación de las necesidades" consiste en que, en el corto plazo, la presencia del Estado seguirá orientada hacia el rescate a los grandes grupos financieros, con la condición de que a mediano plazo sus finanzas públicas se consoliden; para lo cual es necesario "apretar el cinturón" a la sociedad y "ajustar" los posibles "gastos excesivos" del Estado. En la actualidad, se plantea que, mientras en la Unión Europea –comandados por la *troika*– la atención se centra en la disciplina fiscal, programas de recapitalización de la banca europea y política de ajuste; por otro lado, en Estados Unidos se le confiere a la FED su tercera actuación (QE3) para aumentar su tenencia de bonos del Tesoro de largo plazo y la venta de los de corto plazo, la cual ha sido denominada operación *twist* ya que recupera la misma herramienta utilizada en 1960.

En ambos casos, como señala Nouriel Roubini, "...primero vino el rescate de empresas privadas y ahora llega el rescate de los rescatadores, es decir, de los gobiernos", claro está que atendiendo a la hegemonía estadounidense, se exige la aplicación de los criterios más ortodoxos del neoliberalismo en Europa, mientras que su aplicación en este país, deja mucho que desear, como lo indica el hecho de que su laxitud en las finanzas públicas ha llevado a calcular que 2011 será su tercer año fiscal con un déficit presupuestario muy cercano a 10% y que la deuda pública superará 100%, ambos con respecto al producto interno bruto.

En síntesis, el desenvolvimiento de la crisis y el rumbo que ha tomado en los cuatro últimos meses (julio-octubre de 2011) confirman que las políticas económicas instrumentadas a raíz de las manifestaciones más agudas de la crisis, en 2008, se han propuesto proteger al gran capital a costa de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población mundial. De tal manera que si bien se observan algunos giros para atender ciertas expresiones de la crisis, lo cierto es que se realizan dentro del gran paraguas del pensamiento y acciones de política económica del neoclasicismo. Lo cual explica que basileas van y vienen y la reforma integral del sistema financiero, inexplicablemente, continúa siendo la gran asignatura pendiente.

Los estrechos vínculos entre el poder político y el gran capital (financiero y productivo), plantean un escenario en el que difícilmente, este último aceptará una regulación que limite la posibilidad de aumentar la valorización del capital, que le ha permitido que, aun en condiciones de crisis, las grandes empresas transnacionales (financieras y productivas) ven aumentar sus ganancias por medio de la mayor explotación directa del trabajo, con la financiarización y por la vía indirecta que genera la intervención del Estado. Todo parece indicar que sólo la presión y acción que se derive de los movimientos sociales, en la medida que se logren expresar en respuestas políticas alternativas, parciales o integrales, es la que dará lugar a una reconsideración del modelo económico vigente.

**Basileas van y
basileas vienen y la
reforma integral
del sistema
financiero,
continúa siendo la
gran asignatura
pendiente**

DEUDA, RECORTES Y DEMOCRACIA EN LA UNIÓN EUROPEA

Xabier Arrizabalo Montoro

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España

Tres hechos han destacado en las últimas semanas: a) la nueva recesión que se avecina y sus efectos sobre el empleo, b) los recortes sociales, particularmente en la enseñanza pública y c) la contrarreforma constitucional. Es decir, destrucción económica, regresión social y cuestionamiento de la democracia. ¿Son tres hechos relativamente independientes o, por el contrario, forman parte de un todo? Aparentemente, el elemento que los relaciona de forma inseparable es la deuda pública. Pero, ¿el problema es en realidad la crisis de la deuda pública o hay algo más importante detrás?

La experiencia de la “crisis de la deuda externa” que estalló en 1982, en específico en América Latina, es muy elocuente porque comparte elementos con la actual situación europea, especialmente en cuanto a las causas profundas que la provocan así como a las duras medidas y sus drásticos resultados sociales, para cuya imposición se alega como excusa. ¿Por qué se había producido ese endeudamiento? Fundamentalmente, por la crisis capitalista que estalló en los primeros años de los setenta, uno de cuyos detonantes fue la ruptura del Sistema Monetario Internacional (1971). Esta ruptura se debió a la imposibilidad de mantener la convertibilidad dólar-oro impuesta en 1944 como instrumento del inequívoco dominio del imperialismo estadounidense. Desde los setenta, el capital enfrentó dificultades para encontrar espacios de inversión productiva rentables, se volcó hacia las finanzas y en particular hacia las economías dependientes, de forma permanente necesitadas de divisas. Como se aprecia inequívocamente en los indicadores sociales, los créditos no se destinaron al consumo de la mayoría de la población sino que, de facto, se privatizaron para el uso exclusivo de los ricos (más de la mitad de esos fondos se fugaron al exterior). Cuando las políticas monetaristas de Thatcher y Reagan desde 1979-1980 suben los tipos de interés, que pasan de 6-7 a 16-17%, se constata la imposibilidad de afrontar los pagos y los gobiernos no sólo reconocen la deuda privada sino que mayoritariamente la nacionalizan.

Las naciones latinoamericanas, por ejemplo, tenían entonces una deuda en conjunto de 330 000 millones de dólares (mdd). Entre 1982 y 1990, pagaron más de 390 000 mdd (más de 8% del PIB y 40% de las exportaciones durante varios años). Gracias a este pago, en 1990 la deuda se situó en... ¡440 000 mdd! Y la bola de nieve ha seguido aumentando, de modo que su transferencia al exterior de 2.8 billones de dólares hasta 2009, no ha evitado que la deuda pase de 910 000 mdd (datos del Banco Mundial). Vuskovic la llamó “deuda social”, calculándola para el periodo de la dictadura en Chile, sin incluir los recortes de servicios sociales por las privatizaciones, 64 000 mdd, más de 3.5 veces la deuda externa acumulada entonces. A pesar de que realmente ya está pagada varias veces, de manera oficial todavía hay deuda y, por tanto, es objeto de unas supuestas renegociaciones que, en realidad, esconden la imposición por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de durísimos programas de ajuste (privatización, desreglamentación, apertura exterior indiscriminada, recortes sociales, etc.). Las graves consecuencias económicas y sociales del ajuste, en la región latinoamericana, son ampliamente conocidas.

Ahora la deuda aparece de nuevo en el centro de la escena, especialmente en Europa. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto si la deuda pública había sido precisamente una de las variables cuyo control se impuso desde el Tratado de Maastricht para la adopción del euro y se reforzó con el posterior Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento? Tanto la crisis como las políticas aplicadas a su amparo han tenido un efecto importante en las cuentas públicas. Por una parte, los gobiernos han renunciado a fuentes importantes de ingresos con los recortes impositivos a empresas y acaudalados y con las exenciones fiscales. Además, se han reducido otros ingresos fiscales por la caída de actividad, propia de la crisis. Por otra parte, el gasto se ha disparado por los efectos de la crisis, por el propio pago de intereses y por los fondos traspasados a los bancos. Como se ve, no hay ningún consumo excesivo por parte del conjunto de la población; de hecho, los recortes en gasto público social vienen de lejos y especialmente desde los “programas de convergencia” impuestos en 1992 por el Tratado de Maastricht.

El déficit público en la UE se ha disparado por los efectos de la crisis, por el pago de intereses y por los fondos traspasados a los bancos

Tenemos, por tanto, que la regresiva política tributaria y las cuantiosas transferencias al capital, especialmente financiero, han provocado que los efectos negativos de la crisis sobre las cuentas públicas se traduzcan en déficit público. Aun así, hay mecanismos para que este déficit no dispare la deuda pública. En concreto, se podría recurrir al banco central... si no fuera porque esta democrática posibilidad se prohíbe expresamente en el Tratado de Maastricht (artículo 101, actual artículo 123 del TCE), que exige la independencia de los bancos centrales de todo control democrático. Así, el Banco Central Europeo (BCE) puede, sin embargo, prestar a los bancos privados a intereses mínimos (1%), recursos que éstos prestan a intereses mucho más altos (3.4% y más) o dedican directamente a la especulación. En la práctica, esto supone poner a los estados en manos del capital financiero, asignando además un papel central a un segmento de este capital, las agencias privadas de calificación, cuyo funcionamiento es puramente mafioso. Al final la pregunta clave es, como siempre, *cui bono*, quién se beneficia. El mecanismo de la deuda es la piedra angular de una orientación que transfiere masivamente recursos al capital e impone recortes sociales crecientes, bajo el chantaje de impedir la llegada de nuevos fondos; de ahí, los actuales recortes en la enseñanza pública, mientras se trasvasan recursos a la privada.

¿Qué lugar ocupa la modificación constitucional en todo esto? Supone institucionalizar, con el mayor rango legal posible, la prohibición del debate democrático acerca de un aspecto central de la política económica, las cuentas públicas (obedeciendo así a las exigencias literales del Pacto por el Euro Plus de marzo pasado). De igual modo que se apeló reiteradamente a las exigencias del euro y del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, para los recortes sociales, lo que no fue óbice para efectuar gigantescas transferencias a los bancos, la señal de esta modificación constitucional es clara: no va a haber posibilidad de financiar el gasto público social como hasta ahora. El trasfondo de esta medida es político: en un contexto de amplias movilizaciones se trata de cerrar de manera constitucional la posibilidad de que las reivindicaciones sociales sean admitidas. Esto es, el euro que concreta la plena subordinación europea a los intereses del capital financiero, principalmente estadounidense, institucionalizada a su vez en el papel central que se asigna al FMI, de acuerdo, asimismo, a la literal exigencia del Pacto por el Euro mencionado, al que se integra conjuntamente con la Comisión y el BCE en la *troika* que se pretende rija los destinos

de Europa (como ocurrió también con la deuda externa en los ochenta). En definitiva, destrucción económica, regresión social y cuestionamiento de la democracia.

Vale la pena detenerse en los recortes sociales: mayo de 2010 señala el momento en el que se da el tiro de salida a la intensificación del ajuste fondomonetarista, pero ya de una forma prácticamente ilimitada. Para el caso español, por ejemplo, es cuando el Presidente del gobierno es llamado a capítulo a Bruselas –en donde está presente el FMI–, de donde vuelve con un paquete que incluye tres grandes componentes: a) una contrarreforma laboral que profundiza la desreglamentación y abona el terreno para más precariedad; b) un ataque a las pensiones públicas que modifique los años para el cómputo de su monto y aplase la edad de jubilación supondrá un recorte de casi 20%, cuando se complete su imposición, y c) un cuestionamiento del marco general de la negociación colectiva que pretende impugnar todo el *status quo* en materia de convenios, abriendo la puerta a mecanismos de establecimiento de las condiciones laborales cada vez más individualizado y renegociable a la baja.

El complemento final a este paquete es la entronización de la deuda soberana como problema principal y, con ello, la coartada para un vasto plan de recortes presupuestarios, focalizados sobre todo en educación y sanidad, además de otros servicios sociales (en todos los niveles de la administración, nacional, regional y local, considerando que buena parte de sus competencias están transferidas a estos dos últimos entes). Un ejemplo muy significativo es el caso de la enseñanza pública madrileña. En este periodo se ha modificado el cálculo de la fracción de la jornada que los profesores de secundaria dedican a clases regulares, aumentándola de 18 a 20 horas (la jornada completa es de 37.5). Con ello, se ha despedido a 3 000 profesores interinos y se han liquidado una serie de actividades complementarias y medidas de compensación (deshaces en algunas materias, atención personalizada a alumnos con dificultades, trabajo en laboratorios y biblioteca, entre otros).

En el caso español se ha dado una contrarreforma laboral, un ataque a las pensiones públicas y un cuestionamiento del marco general de la negociación colectiva

Estas medidas que suponen un grave retroceso social, se imponen en unas economías, particularmente en el caso español, en las que desde Maastricht ya se había ido materializando un proceso de redistribución muy regresivo. Por ejemplo, entre 1996 y 2006, el salario real promedio había caído 5%, con casi 2 puntos de disminución de la participación de los salarios en el PIB (véase AMECO).

En realidad, no son tres los hechos más destacados de las últimas semanas, sino cuatro. El último es precisamente el amplio proceso de movilizaciones que se extiende por doquier contra los recortes, del que la enseñanza madrileña es también ejemplo con masivas huelgas y manifestaciones que involucran al conjunto de la comunidad educativa. La cuestión de la educación no es cualquier tema. Estos meses estamos viendo cómo en Chile, los estudiantes, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, se movilizan para liquidar el sistema educativo heredado de la dictadura y mantenido por los gobiernos posteriores. Un sistema que siguiendo las doctrinas de corte “neoliberal” de ideólogos estadounidenses como Milton Friedman, cómplice directo de Pinochet, impuso el lucro privado como divisa fundamental del sistema educativo, convirtiéndose en un coste económico imposible de ser asumido por la gran mayoría de las familias. La lucha de los estudiantes chilenos, con el apoyo de los sindicatos obreros, muestra la potencia de la unidad y es referencia para la enconada lucha en defensa de la escuela pública que en estos momentos se libra en España. Los estudiantes chilenos quieren acabar con el modelo que pretenden imponer los gobiernos autonómicos en manos del Partido Popular, el partido heredero del franquismo, sin que el gobierno central del PSOE, sometido a las directrices del FMI, la UE y el BCE, haga nada para impedirlo y que ya los estudiantes alemanes preveían cuando coreaban: “el euro viene, la educación se va”.

Para concluir, conviene precisar que parar los recortes plantea finalmente tres exigencias ineludibles: la anulación de la deuda, la retirada de la *troika* que actúa como un ejecutivo que nadie ha elegido, absolutamente antidemocrático, y el rechazo de toda propuesta de consenso que acepte la premisa de que la clase trabajadora ha de apretarse el cinturón. Ninguna de las tres es posible en el marco del euro, ni en el caso español ni en ningún otro caso. Porque no se trata de la crisis de la deuda, sino de la crisis del capitalismo, a cuyo auxilio acude la UE, la del euro, al precio de cuestionar frontalmente lo que his-

tóricamente ha singularizado a Europa en el contexto mundial: la presencia de toda una serie de derechos democráticos y obreros conquistados gracias a la organización independiente de los trabajadores. Como señala Paul Krugman: “(...) La amarga verdad es que cada vez da más la impresión de que el sistema del euro está condenado. Y la verdad todavía más amarga es que, dado el modo en que ese sistema se ha estado comportando, a Europa le iría mejor si se hundiese cuanto antes mejor” (*El País*, 25.10.11).

El fin del euro no sería la panacea en sí mismo, pues como vemos en Reino Unido, que no utiliza el euro, o en el propio Estados Unidos, las políticas de apoyo al capital financiero están provocando importantes recortes en los programas sociales. En Reino Unido vimos a los estudiantes movilizarse masivamente contra la subida de tasas, a los trabajadores del transporte del Gran Londres y, este verano, la explosión de indignación social que estalló en los barrios más deprimidos de las ciudades inglesas, achacable por completo a los recortes sociales que se han ido aplicando en los últimos años. Igualmente, en EU vemos cómo con el apoyo de importantes sindicatos obreros (sindicatos grandes y pequeños tan dispares como el de guionistas de cine, el de profesores, el de mecánicos o el de empleados del transporte público, entre otros) crece con el movimiento de indignación en contra de los especuladores de Wall Street, a los que el gobierno de Obama está sometido. Pero, objetivamente, el fin del euro eliminaría una traba que, de facto, dificulta enormemente el rechazo a los recortes.

Realmente estamos ante una crisis del sistema capitalista que amenaza con llevar a la humanidad a la barbarie. La respuesta de los trabajadores de la enseñanza en España, de los estudiantes chilenos y británicos, de los sindicalistas estadounidenses, griegos, irlandeses e italianos, significan la defensa de las conquistas sociales y de la civilización, pues el derecho a educar a los hijos, a ser atendido en un sistema público de salud, a disfrutar de una pensión de retiro, viudez o invalidez, no dejan de ser conquistas civilizatorias y su erradicación nos arrojaría a la barbarie.

La respuesta social en España, de los estudiantes chilenos y británicos, de los sindicalistas estadounidenses, griegos, irlandeses e italianos significan la defensa de las conquistas sociales y de la civilización

EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA 2012

Josefina Morales Ramírez

Integrante del GACEM

El proyecto de presupuesto del gobierno federal para el próximo año expresa el continuismo de una política económica que ha fracasado en recuperar un crecimiento sostenido para nuestro país, a pesar de mantener una relativa estabilidad monetaria, hoy cuestionada por el tobogán de la crisis internacional que provocó, en septiembre, la salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 20 500 millones de dólares invertidos por extranjeros, en títulos de renta variable de empresas mexicanas; la peor salida desde 2009, haciendo que el índice de precios y cotizaciones de la BMV perdiera en septiembre 6.2% con respecto al mes previo, cerrando el tercer trimestre del año con una pérdida de 8.4%, su peor trimestre en la era poscrisis de 2008.

La propuesta de Ley de Ingresos de 2012, subestimó el alcance de la crisis internacional en curso desde 2008, que ahora se precipita en una nueva etapa y pronostica un lento crecimiento para los próximos años. La propuesta de presupuesto reitera la limitada capacidad del ejecutivo de realizar una política anticíclica para impulsar el crecimiento económico y el empleo; no incluye medidas para resolver un mayor endeudamiento nacional (gobierno federal, estatal, municipal, de las familias y de las empresas), que aunque se considera todavía manejable en términos macroeconómicos es un problema crítico en algunas entidades del país; y mantiene la desigual distribución del ingreso que ha llevado al incremento absoluto de la pobreza en la crisis. El sexenio tendrá los resultados más mediocres desde el gobierno de Miguel de la Madrid en la crisis de los años ochenta.

Los criterios de política económica en los que se enmarcan los proyectos de ingresos y gastos del gobierno bajan la tasa de crecimiento esperada para este año y pronostican una menor para el siguiente, al mismo tiempo que no proponen ninguna adecuación para aumentar los ingresos fiscales de la federación que están entre los más bajos de América Latina, menos de 10% del producto interno bruto.

El curso de la crisis relevó a un segundo plano el debate nacional de las finanzas públicas al tiempo que en la Cámara de Diputados la revisión de la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo concluyó con una contracción simbólica del crecimiento esperado para el año próximo, ahora de 3.3%, con un ajuste de la tasa del tipo de cambio al establecerlo en 12.80 pesos por dólar, un incremento del déficit público, de 0.2 a 0.4% del PIB, y la prolongación del impuesto especial para la producción y servicios a los combustibles hasta el 1 de enero de 2014, conocido popularmente como el gasolinazo. Ajustes que elevan los ingresos públicos en 84 000 millones de pesos, con un total de 3.7 billones de pesos.

Los ingresos públicos siguen dependiendo, en gran medida, del petróleo y continúen asfixiando, endeudando y entregando al capital extranjero a nuestras empresas públicas del sector energético. Se estima que los ingresos tributarios aumenten en menor medida que el gasto, apenas 2.4 por ciento.

Los impuestos sobre la renta (ISR), tanto de los trabajadores como de las empresas, representan poco más de la mitad de la recaudación total, mientras que se espera que Pemex contribuya con una proporción mayor, lo que significa que el ISR que pagan las empresas en su conjunto es mucho menor que los recursos que proporciona Pemex a la Federación. Demagógicamente se elimina el impuesto de la tenencia, uno de los pocos impuestos que recaudan de manera progresiva, y se deja ahora su recaudación en manos de los debilitados gobiernos estatales, con limitados ingresos locales y algunos de ellos gravemente endeudados.

La deuda total de algunas entidades con gobiernos priistas, exhibe no sólo un crecimiento escandaloso sino un manejo fraudulento de los recursos y del proceso de endeudamiento con la banca comercial y poco transparente en su utilización; tal es el caso denunciado de Coahuila y Veracruz. Para junio de este año, nueve entidades registran un endeudamiento superior al inscrito en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de Entidades y Municipios, destaca el de Coahuila que casi cuadruplica el monto reportado en el Registro, alcanzando un monto de 31 973 millones de pesos, el del estado de Chihuahua con más de 30% y un total de 18 273

La propuesta de Ley de ingresos de 2012, subestimó el alcance de la crisis internacional en curso desde 2008, que ahora se precipita en una nueva etapa y pronostica un lento crecimiento para los próximos años

millones y Zacatecas, que si bien tiene una de las deudas más bajas, la duplicó. La relación entre el total de la deuda y las participaciones recibidas en el primer semestre de este año, muestra la gravedad de esta situación en el caso de Coahuila, 270% y en Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo al estar entre 135.3 y 163.8%. Situación que debe revisar la Auditoría Superior de la Federación y los congresos estatales para proceder legalmente en los casos de mal manejo de los recursos públicos y no permitir que la renegociación de esas deudas con la banca comercial lesione gravemente a las finanzas estatales.

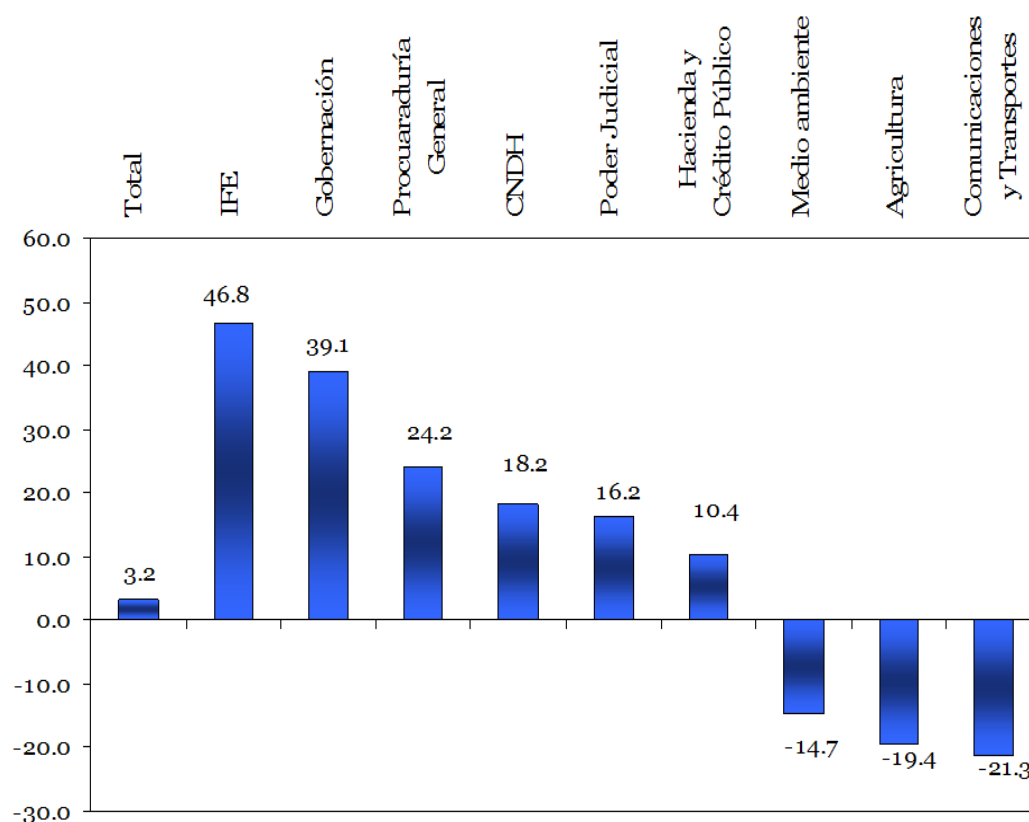
La propuesta del Ejecutivo de incrementar el IVA, rechazada por amplios sectores sociales, se volvió a presentar, ahora disfrazada como mecanismo para fortalecer las finanzas de los estados, pero no fue considerada por el Congreso en estos tiempos electorales.

En los criterios de política económica se afirma que el Proyecto de Presupuesto para 2012 se centra en tres ejes principales: seguridad pública, para cuidar de las personas y de su patrimonio; crecimiento económico, a fin de fomentar la generación de empleos y el desarrollo regional, y desarrollo social, con el propósito de mejorar el bienestar de las familias y de sus comunidades. Sin embargo, el presupuesto sólo atiende el proyecto militarista de la seguridad pública. El presupuesto del último año del sexenio, año electoral pleno de efervescencia política y de contradicciones sociales, no contiene ningún cambio para enfrentar un 2012 que se avizora de contracción económica internacional. En sentido opuesto, contrae las inversiones pública y en comunicaciones y transportes, en agricultura, en educación, en el sector salud, e incluso en el sector energético y sólo eleva el gasto de seguridad.

El gasto público representa más de la quinta parte de la economía nacional y su ejecución dista mucho de tener la transparencia necesaria para una verdadera rendición de cuentas. Según su clasificación funcional, el gasto programable aumentará el año próximo 3.2% y el de los poderes y órganos autónomos aumentará 13.8%, destacando el incremento de 45% de los recursos del IFE. El gasto del gobierno federal se incrementará 11.5% y el de seguridad 25.7%, mientras el gasto en desarrollo social apenas 3.7% y el destinado a desarrollo económico disminuirá. Por dependencias, la Secretaría de Gobernación aumentará

su presupuesto 39.1% mientras las de Agricultura, Comunicaciones y Transporte, Reforma Agraria y Medio ambiente ven disminuido sus recursos y Pemex y la CFE registran un precario incremento de 2.2 y 2.8%, respectivamente.

Gasto programable por clasificación administrativa para 2012.
Principales cambios por dependencia 2011/2012
(pesos de 2012)



Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012, p. 39.

En la discusión y aprobación del presupuesto, además de incorporarse el incremento aprobado en la Ley de Ingresos, seguramente habrá algunas reasignaciones para incrementar los recursos en algunos rubros que se vieron disminuidos en la propuesta del Ejecutivo, sin embargo, no modificarán cualitativamente la política económica propuesta.

El presupuesto del último año del sexenio, año electoral pleno de efervescencia política y de contradicciones sociales, no contiene ningún cambio para enfrentar un 2012 que se avizora de contracción económica internacional

EL ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

Alejandro López Bolaños
Integrante del GACEM

¿Cuáles son los logros del actual gobierno y qué relación mantienen con las metas económicas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)? Los propósitos del PND eran, entre otros, alcanzar una economía competitiva y generadora de empleos y con igualdad de oportunidades. En este segundo eje del Plan se concentra la atención de esta nota, ya que señala como objetivos, el manejo prudente de la economía, históricos niveles de inversión en infraestructura y la promoción de la competitividad, gracias al crecimiento de las exportaciones.

En cuanto al objetivo de alcanzar una economía competitiva, el fracaso ha sido estrepitoso ya que, pese a que la economía creció 5.4% en 2010, no podemos perder de vista que el promedio de crecimiento en el sexenio es de 1.88%, lo cual refleja el estancamiento en el cual se encuentra la actividad productiva nacional; en cuanto al consumo privado, parte fundamental del mercado interno, creció 5%, en el 2010, pero en promedio, en el sexenio, sólo ha crecido 1.9 por ciento, cifra menor a la registrada en 2006 cuando alcanzó el 5.7%, el nivel más alto en el sexenio y sin recuperar la caída de 7.1% de 2009.

Sin duda alguna el tema de empleo y salarios son otras de las problemáticas económicas más evidentes de la presente administración, señaladas continuamente en este *Boletín Momento Económico*, dada la relevancia social del fenómeno. El mercado laboral en México requiere de la creación de 1.2 millones de empleos formales al año para absorber la fuerza laboral que se incorpora a la población económicamente activa. El actual gobierno ha generado en promedio 275 mil 940 empleos netos anuales inscritos en el IMSS entre 2007-julio de 2011. La cifra es inferior a los empleos generados en los primeros cinco años del gobierno de Zedillo cuando se crearon 685 200 empleos formales anuales en promedio. Con Vicente Fox se produjeron 187 400 plazas anuales en promedio.

La tasa de ocupación en el empleo informal llegó a 28.9% en agosto de 2011, por ello, los niveles de empleo obedecen más a una lógica de traslado al sector informal, que en términos absolutos son 13.4 millones de personas. En 2007, los trabajadores informales se contabilizaban en 11.6 millones. En cuanto a los salarios mínimos mensuales, en este sexenio, han crecido 0.1%. Otro dato relacionado, es el hecho de que el porcentaje de población ocupada que gana más de tres salarios mínimos disminuyó a 25.3%, una cuarta parte de la población, al iniciar este sexenio era de 30 por ciento. La participación de los salarios en el PIB, se redujo de 31.1% con Zedillo, a 30.8% con Fox y a 28.7% con el “presidente del empleo”.

La acumulación histórica de reservas internacionales ha servido como un aliciente para la afluencia de capital especulativo, por ello en lo que va de la presente administración, los pasivos de inversión de cartera (mercado de dinero, mercado accionario y valores emitidos en el exterior) suman 85 014.7 millones de dólares, una cifra superior en 68 406.4 millones de dólares a la acumulada en el sexenio de Vicente Fox.

El actual gobierno recibió un endeudamiento interno neto de 15.8% del PIB y 4.4% como deuda externa, que en conjunto representaban 20.2% del PIB. En junio de 2011, la deuda pública en conjunto, aumentó más de 10%, ya que actualmente representa 31.3% del PIB, que se compone por una deuda interna que representa 22.2% del PIB y la externa se duplicó y alcanza 9.1% del Producto Interno Bruto.

Por su parte la estabilidad cambiaria también merece un serio cuestionamiento, pues el tipo de cambio pasó de 10.8979 pesos por dólar promedio en 2006, a 12.6360 en 2010, es decir una devaluación de casi el 16% en los primeros cuatro años de este sexenio. Hasta la fecha no ha logrado estabilizarse la “fortaleza cambiaria” y para la tercer semana de septiembre de 2011, el dólar rebasó los 14 pesos, sin olvidar que entre 2006 y 2008, el peso se devaluó 40% frente a la divisa estadounidense.

Uno de los logros más señalados por el gobierno federal es el crecimiento del gasto en infraestructura, ya que se espera que al cierre de 2012, la actual administración haya realizado una inversión histórica por

Los salarios mínimos mensuales, en este sexenio, han crecido 0.1% y la participación de los salarios en el PIB se redujo de 31.1% con Zedillo a 28.7% con el “presidente del empleo”

326 mil millones de pesos, superior en 279 276 millones a los 46 724 de inversiones de Zedillo y en 210 008 millones a los 115 912 millones del sexenio de Fox. Tan sólo entre 2007 y lo que va de 2011, la inversión para el desarrollo carretero reportada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) asciende a 228 006 millones de pesos. ¿En qué se ha invertido? Lo primero que salta a la vista es que en los primeros cinco años de este gobierno, la longitud de la red nacional carretera aumentó sólo 4 568 kilómetros, muy por debajo de los registrados durante el mismo periodo en el gobierno de Zedillo y en el de Fox que alcanzaron 23 119 y 25 791 kilómetros respectivamente. De tal manera que la red nacional carretera pasó, en el presente sexenio de 360 075 a 364 643 km, que representa un crecimiento de 1.3%, mientras que entre 2001 y 2005 la red creció 7.8%, al pasar de 330 005 km a 355 796 km, y entre 1995 y 1999 se incrementó 7.5%, pues se tenían 306 404 km y se alcanzaron al final del sexenio 329 523 kilómetros.

La campaña publicitaria, al respecto, ha resultado un tanto engañosa, ya que la política en infraestructura durante este sexenio no se ha dirigido al incremento sustancial y trascendente de la red carretera, sino al mantenimiento y modernización de la ya existente. La conservación de la infraestructura actual debe ser, sin lugar a dudas, una acción permanente de los gobiernos de los Estados y de la SCT, pero no puede estar dissociada de la generación de nuevas redes que tengan como metas una mejor articulación del mercado interno y el desarrollo regional y social.

En los primeros cinco años del actual gobierno, las exportaciones han crecido 5.5%, mientras que las importaciones crecieron a una tasa de 5.2%. Cifras que son ligeramente superiores a las registradas por el gobierno de Vicente Fox, etapa en la cual las exportaciones crecieron 5.05%, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 5.5%. El contraste principal se da con el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando las exportaciones crecieron 12.9% y las importaciones 18.7 por ciento.

A julio de 2011, el valor de las exportaciones alcanza 27 852 millones de dólares, monto mayor en 19.4% al registrado en julio de 2010. Los productos manufacturados se incrementaron 16.8% en el periodo julio 2010-julio 2011, concentrados en productos químicos, siderúrgicos, minerometalúrgicos y automotrices, en el caso de estas últimas, entre julio de 2010 y julio de 2011, crecieron 34.4% con destino principal (76% del total) a

Estados Unidos (EU). No debe perderse de vista que, ante la caída en la economía de EU, la producción industrial del vecino del norte se contrajo casi 10% entre 2008 y julio de 2011, situación que ha motivado una menor demanda de las exportaciones manufactureras mexicanas. La balanza agropecuaria creció 10.4% a tasa anual, incremento originado por la mayor demanda externa de jitomates, café, frutas, pescados y moluscos.

El gran contraste viene dado por el tipo de importaciones que el país adquiere. En bienes de consumo, las importaciones crecieron entre julio de 2010 y el mismo mes de 2011, 30.7%, los bienes intermedios 16.6% y los bienes de capital 23%, datos que reflejan la grave disparidad presente en las mercancías exportadas de bajo valor agregado y escaso componente tecnológico y las importaciones tecnológicas que además de afectar el saldo de la balanza comercial reflejan la fuerte dependencia en ciencia y tecnología.

En el caso de las importaciones petroleras, éstas crecieron 46.3% en el periodo referido, en el cual ocupan un lugar destacado las gasolinas. La inoperancia del Sistema Nacional de Refinación (SNR) provocó una sangría al país por 10 535 millones de dólares en el 2010 por la compra de gasolinas a Estados Unidos, ocho veces más de lo que representó en el 2000. En el presente gobierno, la política de importación de combustibles muestra que casi cinco de cada 10 litros que se queman en el país provienen del extranjero, principalmente de EU.

Las acciones realizadas por el gobierno federal están muy lejanas de lograr una importante mejoría de las condiciones de vida de la población nacional. Incluso en temas que habían sido considerados como parcialmente superados, hoy se observan significativos retrocesos, como se puede corroborar en cuanto a los niveles de pobreza existente en el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2008 y 2010, el número de pobres en México aumentó en 3.2 millones, pues la pobreza moderada pasó de 37.2 millones en 2008 a 40.3 en 2010, mientras que la pobreza extrema registra los mismos niveles en ambos años y alcanza a 11.7 millones de personas en México.

Las acciones realizadas por el gobierno federal están muy lejanas de lograr una importante mejoría de las condiciones de vida de la población nacional

El informe del Coneval revela que ocho de cada 10 mexicanos padece algún grado de vulnerabilidad, pero 6.5 millones tienen un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y 32 millones son vulnerables por carencia, es decir, aun cuando su ingreso es mayor a la línea de bienestar, son grupos de personas que tienen al menos una carencia. Señala el organismo, que la política social, particularmente los programas sociales como Oportunidades, ha logrado proteger a la población en pobreza extrema, sin que ello signifique la superación de su condición. Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, donde el principal problema es que el país retrocedió 15 lugares en la distribución de la riqueza entre la población, profundizando la desigualdad entre los ricos y pobres, pasando del lugar 57 al 72 en una lista de 187 países.

El recuento de algunos de los malogrados objetivos económicos de los ejes propuestos en el PND, no pueden ser ajenos a los efectos sociales de una fallida estrategia de combate al crimen organizado, que ya ha dejado más de 50 000 muertes, 10 000 desaparecidos y más de 120 000 desplazados, cierre de empresas y caída de la actividad económica en el norte del país. Sólo en Nuevo León han cerrado cerca de 1 000 empresas en el periodo 2008- julio 2011.

La meta de alcanzar la igualdad de oportunidades, se tendrá que incorporar en los programas de desarrollo de los próximos años, pues las debilidades estructurales de la economía mexicana se continúan manifestando en: construcción de viviendas en zonas de alto riesgo geográfico, 5.4 millones de personas analfabetas, de las cuales 61% son mujeres, cobertura universitaria que sólo abarca el 30% de los jóvenes, reflejo de un país que destina 0.7% del PIB a la educación superior y 0.4% a la investigación; además de que uno de cada dos pesos del gasto en salud de la población va para el sector privado y que los recursos destinados al gasto en salud pública per cápita, es el más bajo de la OCDE, en México se estima en 852 dólares, pero el promedio de la organización es de 3 060 dólares.

El PND también impulsa el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y una política exterior responsable. Temas sin lugar a dudas trascendentes para el país y que exigen una investigación particular. Al respecto y sólo a nivel de señalamiento, recuperemos la información sobre los casos documentados y en litigio de proyectos de inversión

turística depredadores del medio ambiente, el nulo avance en el uso de energías alternativas; así como las dificultades para el avance de una democracia efectiva por las condiciones de ignorancia, pobreza e inequitativa distribución del ingreso y debilidad institucional en la que se desenvuelve la economía mexicana. Otra problemática, igualmente trascendente, es la referida a la necesidad de una política exterior responsable, la actual ha dado visos de mediocridad no sólo porque ha permitido el tráfico de armas y la presencia de ejércitos foráneos en territorio nacional, por su limitada acción en la defensa de los inmigrantes mexicanos en territorio estadounidense y por la persistencia en violaciones a derechos humanos de los centroamericanos que transitan por el país o que se encuentran laborando en él, sino también por no haber presentado ninguna iniciativa que proponga un profundo replanteamiento responsable, del contenido y acciones del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, que reconsidere las relaciones de dependencia que fundamentalmente ha establecido con el primer país y que aliente la diversificación de nuestras relaciones comerciales y financieras.

En suma, la revisión de algunos de los principales indicadores económicos, en relación con las metas y acciones del PND 2007-2012, nos deja un recuento poco alentador, sin la promoción de proyectos creativos que avancen en el diseño de un modelo económico que permita iniciar una senda de crecimiento que tenga un amplio y directo efecto en el conjunto de la sociedad mexicana. Fenómeno que no es propio de este sexenio, ya que la economía mexicana lleva tres décadas de estancamiento y cada día se agudizan las problemáticas propias del modelo tales como el desempleo y la falta de oportunidades educativas para millones de jóvenes. Recientemente, ante la crisis, se escuchan pronunciamientos que abogan por “reformas estructurales” que se encaminen a mayor liberalización comercial y financiera, menos Estado y más flexibilización laboral. Es decir, más de lo mismo. Lo alentador es que, paralelamente, se escuchan otras voces que abogan por un nuevo modelo de desarrollo que logre revertir esas tendencias.

La economía mexicana lleva tres décadas de estancamiento y cada día se agudizan las problemáticas propias del modelo, tales como el desempleo y la falta de oportunidades para millones de jóvenes

Directorio

Dra. Verónica Villarespe Reyes
Directora

Mtro. Gustavo López Pardo
Secretario Académico

Aristeo Tovías García
Secretario Técnico

Dra. Genoveva Roldán Dávila
Coordinadora GACEM

Dra. Josefina Morales Ramírez
Mtro. Juan A. Arancibia Córdova
Dr. Alejandro López Bolaños
Dra. Genoveva Roldán Dávila
Grupo de Análisis de la Coyuntura de
Economía Mexicana (GACEM)

María de Jesús Cervantes
Hernández
Asistente

Marisol Simón Pinero
Corrección de estilo

Boletín MOMENTO ECONÓMICO (nueva época), año 1, núms. 13-14, septiembre-octubre de 2011, es una publicación mensual de distribución gratuita editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de Economía Mexicana (GACEM) del Instituto de Investigaciones Económicas, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D. F., www.iiec.unam.mx, tel. (55)56230115. Editor responsable: Dra. Genoveva Roldán Dávila, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título 04-2011-030212053900-203, ISSN en trámite, Licitud de Título y Contenido en trámite. Impresa por el Instituto de Investigaciones Económicas, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D. F., www.iiec.unam.mx, tel. (55)56230115. Este número se terminó de imprimir el 16 de noviembre de 2011 con un tiraje de 200 ejemplares. Distribuido por el Instituto de Investigaciones Económicas, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D. F., www.iiec.unam.mx, tel. (55)56230115.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente completa.



www.iiec.unam.mx
Correo: bomotec@unam.mx

LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL.

SARAHÍ ANGELES CORNEJO†

(in memoriam)

Editorial del GACEM

Ante las políticas privatizadoras frente a la industria energética nacional, la figura crítica de Sarahí Ángeles Cornejo representa una guía en la defensa de este sector. Una amplia obra que trascienden el entorno universitario, ya que incluye numerosos foros nacionales e internacionales, en los que reflexionaba y comprometía un pensamiento que rescata las raíces más profundas y genuinas de la concepción que considera a la riqueza energética, parte del patrimonio nacional.

La reforma energética de 2008, provocó que Sarahí Ángeles retomara, en un taller que coordinó durante un año en este Instituto con destacados expertos en el tema, el análisis que durante tres décadas de manera permanente realizó sobre las políticas que se instrumentan en este periodo y que se orientan hacia la privatización del sector energético. El resultado, es la obra *Reforma Energética. Anticonstitucional, Privatizadora y Desnacionalizante*, publicada en dos volúmenes, recientemente, la cual coordinó y compiló. En este libro recupera la definición de Naciones Unidas, en cuanto a que la privatización del sector no implica, exclusivamente, la transferencia de la propiedad pública a la iniciativa privada, ya que, la introducción de las fuerzas del mercado incluyen la contratación de algunas de las actividades de las empresas estatales con empresas privadas nacionales y extranjeras, la desregulación de los monopolios o cuasi monopolios, así como la venta de activos y/o bienes públicos.

Sarahí, nuestra querida amiga y compañera, sostiene que con la reforma de 2008, las actividades reservadas en exclusiva a la nación, vía Pemex, se abrieron al sector privado o a terceros, como se les llama a los inversionistas privados, se quitó al Estado la exclusividad que establece la Constitución para la explotación de los hidrocarburos en toda la cadena petrolera, desde la exploración hasta la petroquímica. Este proceso de privatización ha sido impulsado desde el inicio de la aplicación del neoliberalismo en 1982, por fuerzas externas: por el capital trasnacional financiero y corporaciones multinacionales directa o mediante sus respectivos estados, organismos internacionales, tratados internacionales, contando con la connivencia de los gobernantes y las élites del país que se han beneficiado de las privatizaciones. Siempre crítica ante el manejo estatal de los ingresos petroleros, resaltó en sus trabajos lo peligroso de continuar con una política fiscal sustentada en el gravamen de más de 100% de las utilidades de Pemex, lo cual obliga a la paraestatal a contratar mayor deuda para solventar sus contribuciones a Hacienda. Destacó también, que las empresas estatales del sector energético han sido sometidas a severas restricciones presupuestarias, lo que lleva a una caída de la inversión, a la obsolescencia de las instalaciones e incluso a la agudización de problemas de mantenimiento.

Ante los embates anticonstitucionales, privatizadores y desnacionalizadores de la reforma de 2008, la obra intelectual de Sarahí Ángeles permanecerá como un faro que no sólo guía, sino que da alicientes a todos aquellos que, como ella, sostenemos que es posible construir una industria energética nacional autónoma, fuerte y cuyo objetivo principal sea participar en la construcción de un verdadero desarrollo nacional en México.